

Espacios invisibilizados: actores violentos no-estatales y 'ciudadanía de sombra' en la frontera colombo-ecuatoriana

Annette Idler

University of Oxford, United Kingdom

Resumen: Este artículo busca profundizar nuestro entendimiento de las realidades socio-políticas en los territorios fronterizos colombo-ecuatorianos. De importancia para el narcotráfico y expuestos a un conflicto armado, estos territorios están caracterizados por sistemas débiles de gobernanza estatal, un ambiente de 'bajo riesgo/alta oportunidad' e impunidad. Este trabajo analiza cómo estos factores y la presencia de actores violentos no-estatales inciden en las realidades socio-políticas. Explorarlas desde una perspectiva basada en la ciudadanía muestra que las lógicas transfronterizas, las interpretaciones inadecuadas de los centros políticos y la falta de difusión de información desde la frontera conllevan a la invisibilización de estas realidades.

Palabras clave: Zonas fronterizas, Colombia, Ecuador, actores violentos no-estatales, realidades socio-políticas, ciudadanía de sombra, seguridad ciudadana, siglo XXI.

Abstract: This article aims to enhance our understanding of the socio-political realities in the Colombian-Ecuadorian borderlands. Of importance for drug trafficking and exposed to an armed conflict, these territories are characterised by weak state governance systems, a "low risk/high opportunity environment", and impunity. This work analyses how these factors and the presence of violent non-state actors impact in the socio-political realities. Exploring them from a "citizenship-lens" demonstrates that the trans-border logics, the political centres' misperceptions and the lack of diffusion of information from the border lead to the invisibilisation of these realities.

Keywords: Borderlands, Colombia, Ecuador, violent non-state actors, socio-political realities, shadow citizenship, citizen security, 21st century.

Introducción

Desde otras regiones se puede pensar que existe un tema delicadísimo de seguridad, pero si tú recorres la frontera no encuentras los problemas, no son visibles a simple vista (E37, 2012).

Esta afirmación de un político local de una provincia ecuatoriana que limita con Colombia refleja la paradoja de las realidades socio-políticas de los territorios fronterizos colombo-ecuatorianos. La percepción desde afuera es la de un lugar violento, mientras que la impresión que uno recibe al visitar la zona es la de un sitio tranquilo —y los habitantes suelen confirmar esta tranquilidad. Sin embargo, esta realidad invisibiliza a otra, en la



cual la pertenencia a una comunidad transfronteriza más que el hecho de ser ciudadano de un Estado determina la vida cotidiana. Esta vida frecuentemente está marcada por un orden impuesto por actores violentos no-estatales (AVNE) que, de manera invisible para los de afuera, definen las reglas de juego.

De importancia geoestratégica para la industria de cocaína y expuestas a un conflicto armado, las zonas fronterizas de Colombia son lugares atractivos para los AVNE como grupos guerrilleros, paramilitares, post-desmovilizados y organizaciones criminales. Como se discute más adelante, varias características de las zonas fronterizas andinas agudizan estas dinámicas: su inclinación hacia sistemas débiles de gobernanza estatal; un ambiente de 'bajo riesgo/alta oportunidad'; y una propensión a la impunidad. La presencia de los AVNE en territorios fronterizos ha provocado múltiples preocupaciones de seguridad.

Es importante destacar cuatro líneas de argumentación de los estudios socio-políticos referente al tema de la seguridad en la región. Primero, analistas como Rabasa & Chalk (2001) ponen énfasis en la deficiente soberanía territorial del Estado colombiano, lo que amenaza la seguridad nacional; segundo, teorías de efectos *neighbourhood* sugieren el desbordamiento del conflicto (Poe & Isacson 2009; Millett 2002); tercero, Ramírez (2011) y Bustamante (2011) destacan las implicaciones de disputas en la frontera para las relaciones internacionales; y cuarto, Mason & Tickner (2006) sostienen que las dinámicas de seguridad trans-regionales están en juego. Mientras que estos autores se concentran en lo territorial y estatal, existen otros trabajos con énfasis en las comunidades fronterizas. Organizaciones como Human Rights Watch (2010) han denunciado desplazamientos masivos y otras formas de violencia que inciden en la seguridad física de las comunidades.

Ninguna de estas contribuciones parece profundizar en las dinámicas socio-políticas que surgen de la presencia de los AVNE en territorios fronterizos. Hay trabajos sobre la vida social de las comunidades, por ejemplo Celi, Molina & Weber (2009), pero estos tienden a examinar sólo un grupo poblacional, por ejemplo los indígenas, y sólo consideran un lado de la frontera. En resumen, no se han tomado en cuenta las realidades socio-políticas de las comunidades transfronterizas que surgen cuando confluye la presencia de AVNE con las características de zonas de frontera.

A través de este artículo propongo que para entender estas realidades, hay que explorar las características de territorios fronterizos de manera diferenciada y complementar el análisis con una perspectiva desde la ciudadanía. Esto permite demostrar cómo la relación Estado-sociedad está distorsionada en estos espacios o, incluso, es sustituida por una relación AVNE-sociedad. Estas lógicas transfronterizas tienden a estar invisibilizadas.

La metodología de esta investigación se basa en un diseño de estudio de caso sobre las dinámicas en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana entre 2007 y 2012. El trabajo de

campo se realizó desde agosto 2011 hasta mayo 2012 en los departamentos y provincias que comparten la frontera colombo-ecuatoriana: en Colombia, los departamentos de Nariño y Putumayo; y en Ecuador, las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Además, se realizaron entrevistas en Bogotá y Quito. Este mapa muestra los lugares del trabajo de campo y los lugares a los cuales se hace referencia en este artículo:



Figura 1. La zona fronteriza colombo-ecuatoriana (mapa: Annette Idler).

Se han recopilado varias fuentes de datos y usado diferentes métodos de investigación. La investigación incluyó entrevistas semi-estructuradas con académicos, oficiales del gobierno y de las fuerzas públicas, personal de las Naciones Unidas y de organizaciones no-gubernamentales, líderes comunitarios, personas en situación de desplazamiento y excombatientes. Esta información se ha complementado con documentos de políticas públicas, artículos de medios de comunicación, literatura académica referente al tema, la evaluación de encuestas y la revisión de bases de datos.

La argumentación de este artículo se desarrolla de la siguiente manera: Primero, se sitúa la frontera colombo-ecuatoriana en el contexto del conflicto colombiano, después se desarrollan los conceptos de 'frontera', 'ciudadanía' y 'ciudadanía de sombra' para luego analizar las realidades socio-políticas en la frontera colombo-ecuatoriana y explorar cómo estas, por las formas específicas de ciudadanía que existen en estos territorios, están invisibilizadas. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas de este análisis.

El conflicto armado colombiano y el narcotráfico

El conflicto en Colombia empezó con una primera fase de violencia en 1946 y en los años sesenta se convirtió en un conflicto armado asimétrico entre el gobierno y grupos de guerrilla izquierdista, notablemente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Leal Buitrago 2004: 87-105). En los años setenta a la naturaleza multidimensional y la diversidad de los actores vinculados al conflicto se añadió otro factor: Colombia emergió como el productor de cocaína más grande del mundo con cada vez más actores involucrados en este negocio ilícito. La coca se había cultivado principalmente en Bolivia y Perú mientras que Colombia era el centro de procesamiento y tráfico; no obstante, cuando surgieron los carteles de Medellín y de Cali en los años ochenta, los traficantes colombianos empezaron a dominar el negocio por completo. Esto benefició a la mayoría de los grupos armados (UNODC 2010: 81). Los grupos paramilitares que surgieron en la misma década como respuesta a las altas tasas de violencia empezaron a prestar sus servicios letales a grupos criminales de traficantes (Poe & Isacson 2009: 4). Las FARC y el ELN se aprovecharon del negocio de cocaína a través del cobro de impuestos a traficantes a cambio de proteger los cultivos ilícitos, los laboratorios y las exportaciones (Steinitz 2002: 3). Cuando desmantelaron los dos carteles en los años noventa y el negocio se fragmentó, los grupos colombianos intensificaron la siembra de coca dentro de Colombia y los paramilitares y las FARC se involucraron cada vez más (UNODC 2010: 81). Desde 2003 hasta 2006 la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creada en 1997, se desmovilizó, lo que resultó en la emergencia de grupos fragmentados (ICG 2010: 9), que empezaron a establecer acuerdos efímeros entre sí para beneficiarse de la industria de cocaína (Idler 2012b).

Para poner en contexto la frontera colombo-ecuatoriana es importante no sólo tomar en cuenta el negocio de drogas ilícitas sino también las recientes políticas de seguridad diseñadas y coordinadas desde Bogotá. En el año 2000 se aprobó el Plan Colombia, una iniciativa antidroga y anti-insurgencia que más tarde –con la colaboración de Estados Unidos– se volvió parte de la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Mientras que, aparentemente, las políticas de Uribe consolidaron la seguridad en las zonas urbanas y debilitaron a las FARC, contribuyeron a mover los impactos del conflicto hacia la periferia. Las fumigaciones para erradicar la coca contribuyeron a la migración de las plantaciones al otro lado de las líneas fronterizas; las intensas operaciones militares de las fuerzas armadas colombianas incrementaron los flujos de refugiados y se volvieron en un motivo adicional para los grupos armados colombianos para localizarse en las áreas fronterizas con el objetivo de recuperarse, reorganizarse y coordinar ataques o actividades ilegales económicas (ICG 2012).

Los conceptos 'frontera', 'ciudadanía', y 'ciudadanía de sombra'

El concepto 'frontera' adquirió su principal significado con el entendimiento westfaliano del Estado-nación. En este sentido, las fronteras son entendidas como entidades fijas, legales, geopolíticas o divisiones políticas que transfieren soberanía y territorialidad a los Estados-nación (Baud & Schendel 1997: 214). Sin embargo, actualmente se las comprende como socialmente construidas (Atzili 2007: 141) y como expresiones mentales del poder territorial que no siempre coinciden con experiencias en el terreno.

La importancia de las fronteras modernas es interpretada de manera diferente por realistas, globalistas y estudiosos de economía política internacional. Los realistas ponen énfasis en la función militar tradicional. Como constata por ejemplo Andreas (2003: 81), las fronteras son líneas estratégicas que se defiende o cuestiona militarmente. Por eso, sobre todo en regiones con alta conflictividad, las fronteras cuentan con una fuerte presencia militar, mientras que instituciones civiles son ausentes. Los globalistas como Ohmae (1990) en cambio, afirman que la creciente interdependencia global ha hecho que las fronteras sean cada vez menos relevantes. La liberación económica, la movilidad financiera y las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte volvieron borrosas las fronteras y las transformaron en puentes para transacciones comerciales, en lugar de obstáculos económicos y líneas militares consolidadas (Andreas 2003: 83). Finalmente, los autores de la economía política internacional afirman que la geopolítica está transformada, no transcendida (Andreas 2003: 108). Por eso, el carácter transnacional de los territorios fronterizos hace que las fronteras sean de creciente relevancia global.

Los territorios de frontera son regiones situadas en los márgenes de los Estados y se extienden a ambos lados de una frontera internacional (Goodhand 2008: 228). Según Goodhand (2008: 228), donde termina la periferia fronteriza y empieza el centro controlado por el Estado puede conceptualizarse como una frontera interna, móvil, semi-permeable en la cual la intensidad administrativa es cada vez más fuerte. Estudiar territorios de frontera requiere un enfoque que considera el área de los dos lados de la frontera como una sola unidad espacial de análisis y por eso cuestiona enfoques Estado-centristas (Baud & Schendel 1997: 216). Esto se deriva del hecho de que estos territorios están interconectados de manera horizontal por el flujo de bienes, personas e ideas. Además, los sistemas políticos y culturales de los dos lados coinciden en los territorios fronterizos (Goodhand 2008: 230). A diferencia de territorios fronterizos, el término zona fronteriza se refiere a sólo un lado de la frontera; es decir, al espacio que está en un lado limitado por la línea de frontera.

El trabajo de campo de la autora en territorios fronterizos colombo-ecuatorianos y colombo-venezolanos sugiere que existen por lo menos tres características de territorios de frontera que las hacen atractivas para los grupos armados ilegales y que estimulan los surgimientos de economías paralelas. Primero, su inclinación hacia sistemas débi-

les de gobernanza estatal, arraigados en el abandono histórico de las zonas de frontera por parte de los Estados, los cuales facilitan el surgimiento de sistemas de gobernanza paralelos. El hecho de que el Estado descuide las comunidades fronterizas facilita a los AVNE a ganar el apoyo de la población local. Segundo, el ambiente de bajo riesgo/alta oportunidad que surge de su carácter transnacional hace que las actividades ilegales transfronterizas sean altamente rentables. Conectando dos sistemas económicos diferentes, la frontera funciona como catalizador de ganancias financieras porque el declive o el incremento de valor en las fronteras hacen que las actividades ilegales transfronterizas sean sumamente lucrativas (Goodhand 2008: 235). Sin embargo, estas características también las convierte en un escenario propicio para actividades ilegales. En presencia de sistemas deficientes de gobernanza estatal incrementan las ventajas comparativas de estas actividades. En estos casos, las franjas fronterizas suelen estar poco integradas en la economía nacional y por ende existe más solidaridad entre comunidades fronterizas de ambos lados que sentido de pertenencia al gobierno nacional. Esta ausencia del Estado también explica por qué lo que es ilegal para el Estado puede resultar lícito para las comunidades fronterizas (Schendel & Abraham 2005: 4). La tercera característica es la propensión a la impunidad debido a que constituyen espacios en donde se enfrentan dos jurisdicciones. Esta es una ventaja comparativa vis-à-vis del Estado: optan por la infraestructura más conveniente, mientras que las fuerzas públicas están ligadas a la jurisdicción y el territorio nacional (Idler 2012a: 102).

Dadas las tres características propias de los territorios de frontera de Colombia, las comunidades fronterizas viven realidades socio-políticas muy específicas vinculadas a una forma de ciudadanía particular. El concepto de la ciudadanía aplicado en esta investigación está basado en la relación entre el Estado y la sociedad (y por ende difiere del concepto de la ciudadanía universal). Según este concepto, la ciudadanía implica normas que fomentan la lealtad de los ciudadanos hacia el Estado a cambio de la capacidad y la disposición estatal a responder a las necesidades de los ciudadanos. Conceptualizar la relación Estado-sociedad como una función de capacidad y respuesta (*responsiveness*) estatal por un lado, y el tejido social por el otro, facilita tener en cuenta la bi-direccionalidad de esta relación. La capacidad estatal significa que el Estado puede ejercer sus funciones básicas, es decir, prestar servicios básicos, bienes públicos y crear incentivos para actividades económicas legales. La respuesta estatal se refiere a que el Estado responde a los intereses de los ciudadanos, permitiendo la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas (Picciotto et al. 2007: 12-14). El tejido social (cohesión social) entre ciudadanos se basa en “la consolidación de relaciones sociales, interacciones y lazos” (Berger-Schmitt 2000: 28). Los ciudadanos se identifican como miembros de una sociedad; aceptan “reglas de comportamiento adecuado” acordadas entre el Estado

y ellos mismos que son expresadas en las normas y los valores de la ciudadanía (March & Olsen 2008: 691-692).

Esta forma de ciudadanía es un caso ideal pues la realidad tiende a divergir de ella. Si el Estado no es suficientemente capaz ni receptivo, las normas –incluidas las reglas del comportamiento adecuado– se volatilizan. La bi-direccionalidad de la relación Estado-sociedad disminuye, y el tejido social a nivel estatal se vuelve más difícil de alcanzar. Muchas veces, esto es el resultado de fallas internas del Estado y, sobre todo en países en desarrollo como Colombia y Ecuador, puede ocurrir en zonas amplias del territorio nacional. No obstante, la disfuncionalidad de la relación Estado-sociedad puede empeorar por influencias externas, por ejemplo por AVNE que buscan un Estado débil como base de sus operaciones.

También hay casos donde actores no-estatales sustituyen la relación Estado-sociedad con una relación entre ellos y la sociedad y definen las reglas de comportamiento. Si estos actores son AVNE, pueden establecer lo que la autora llama 'ciudadanía de sombra': un conjunto de estructuras organizativas ilegales que están institucionalizadas y que guían el comportamiento de aquellos ciudadanos que viven en el territorio en el cual el grupo mantiene el control. Esto surge cuando tres fenómenos concurren. Primero, los AVNE ejercen control político, social y económico. Segundo, estos se constituyen como una autoridad local ilícita porque son concebidos legítimos. Tercero, los ciudadanos se sienten abandonados por el Estado. En este caso, el sentido de pertenencia con el Estado a través de la ciudadanía ha perdido su significado. Dicho de otro modo, si una parte significativa de la población nacional 'sale' de la relación Estado-sociedad (Hirschman 1970; Picciotto et al. 2007), y 'entra' en otra relación bilateral con AVNE, la primera entra en duda.

En la medida en que los ciudadanos cumplen leyes de las autoridades al margen de la ley, es poco probable que experimenten violencia física. En este sentido, se puede constatar que existe un tipo de "seguridad ciudadana de sombra" (Idler 2012a): algunos ciudadanos afirman que sus comunidades son más seguras bajo el control de AVNE que con las fuerzas del Estado porque estos grupos imparten orden. También consideran que los sistemas de justicia de los AVNE son más eficientes porque los delincuentes están castigados inmediatamente mientras que la justicia estatal se demora más (E27, 2011). Incluso los servicios básicos y oportunidades económicas se consideran mejores cuando están provistos por AVNE. Llenando el vacío gubernamental del Estado, la realización de estas actividades ha ayudado a que los AVNE 'se ganen los corazones y mentes' de las comunidades locales en vez de sólo basarse en la fuerza. Sin embargo, este 'orden' impartido por actividades ilegales y violentas sólo es la 'sombra' de la seguridad ciudadana. Un ejemplo de esto lo constituye el asesinato y descuartizamiento de tres jóvenes en 2010 por parte de Los Rastros por no pagar una extorsión (Defensoría del Pueblo

2010). Aunque la violencia física se mantenga relativamente baja, el tejido social de la población está afectado de manera grave. Dado que los AVNE tienen el control sobre el comportamiento y el discurso, los ciudadanos están impedidos a la hora de hacer pronunciamientos de opinión y preferencia, y no se pueden organizar para la realización de acciones colectivas. La voz de las comunidades se encuentra silenciada. Esta estigmatización y desconfianza hacen que se dificulte construir puentes con personas de otras zonas del país, la conformación de organizaciones de la sociedad civil, movimientos o instituciones que trasciendan el nivel local.

Las dinámicas socio-políticas en la frontera colombo-ecuatoriana

En esta parte se analiza cómo las características de territorios fronterizos, junto con el contexto geopolítico, producen realidades socio-políticas muy particulares en la frontera colombo-ecuatoriana. Entre las fronteras que Colombia comparte con sus vecinos (Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela), por razones geo-estratégicas y las condiciones climáticas, la zona que limita con Ecuador (aproximadamente 585 kilómetros) es un área clave para el negocio de la cocaína y tiene una alta presencia de grupos de AVNE. En el 2010 en los dos departamentos colombianos que comparten frontera con Ecuador (Nariño y Putumayo), se reportó la existencia de 20.736 hectáreas de cultivos de coca, es decir, 34 por ciento de la superficie total de los cultivos de coca en Colombia (UNODC 2011: 16). La frontera colombo-ecuatoriana queda cerca de Bolivia y Perú, donde se produce coca también, y, además, una gran cantidad de los insumos para la elaboración de la cocaína provienen del Ecuador, que además es un país de tránsito para las rutas hacia EE.UU. Por eso, los AVNE en la región no sólo se aprovechan de un suministro importante de insumos para el procesamiento de la coca, sino también cuentan con condiciones favorables para los pasos más avanzados de la producción de cocaína (UNODC 2011: 81). Cabe destacar que los territorios fronterizos colombo-ecuatorianos son muy diversos. Comprenden la zona costera del pacífico, el área montañosa de los andes y la zona selvática tropical del Amazonas en el este. Múltiples pueblos indígenas como los pastos o los awá, afro-descendientes, comunidades campesinas y colonos, para nombrar sólo a algunos, habitan la región. El contexto histórico, socio-económico y cultural varía según la zona, de ahí también deriva que las realidades socio-políticas son muy distintas según el lugar específico, lo que se intenta tomar en cuenta en este análisis. Además de estos factores, las tres características de territorios de frontera de Colombia inciden en estas dinámicas y distorsionan la relación entre el Estado y la sociedad: los sistemas débiles de gobernanza estatal, el ambiente de bajo riesgo/alta oportunidad y la impunidad (Idler 2012a: 99). En presencia de AVNE la disfuncionalidad de la relación Estado-sociedad tiende a agravarse.

Primero, los débiles sistemas de gobernanza estatal pueden ocasionar que las comunidades fronterizas desarrollen sus propias formas de gobernanza. La debilidad gubernamental, es decir, la deficiente presencia de las instituciones civiles del Estado, está arraigada en la negligencia histórica de Bogotá y Quito con sus zonas fronterizas. Debido a las prácticas centralistas de Colombia, las políticas no han puesto mucho énfasis en las zonas periféricas. Igualmente, en el país vecino, el poder político se ha concentrado históricamente en los centros urbanos. Los márgenes de los Estados sólo han sido considerados en términos de la línea fronteriza para resguardar la seguridad nacional. Este abandono se refleja en el desarrollo socio-económico de la región fronteriza. En el cantón ecuatoriano de San Lorenzo por ejemplo, en el año 2008 la tasa de analfabetismo era de 16,88 por ciento mientras que la tasa nacional era del nueve por ciento. Estadísticas sobre la salud revelan la situación alarmante del bienestar de las comunidades fronterizas: en el año 2008 en el cantón ecuatoriano de Lago Agrio la tasa de mortalidad infantil era de 7,8 por ciento y en San Lorenzo de 33,1 por ciento (Dumas & Frank 2009: 7-9).

Los indicadores económicos también son preocupantes. En el departamento colombiano de Nariño por ejemplo, en 2011, el 65 por ciento de la población vivía en pobreza y el 24 por ciento en pobreza extrema (E1, 2011). La situación en Ecuador es parecida, por lo cual un militar de Palma Real (E2, 2012) explicó: “¿La situación de la calidad de vida aquí? Muy mal, muy mal. ¡Vivimos en condiciones infrahumanas!” Además, la infraestructura vial y de comunicación es deficiente. Sobre todo en el lado colombiano muchos pueblos carecen de conexiones apropiadas con ciudades cercanas. Una habitante de Barbacoas en Nariño contó que se demora hasta 13 horas para viajar desde su pueblo a Pasto, un camino de 57 kilómetros (E3, 2011). Como consecuencia de la deficiente infraestructura vial, en algunas zonas, por ejemplo en Bajo Putumayo donde la autora lo experimentó, las comunidades cobran peaje a los carros que transitan la carretera para arreglar los huecos o pavimentarla. También hay casos en los que la comunidad se organiza ante el Estado para exigir su actuar, como lo hizo el movimiento de las “piernas cruzadas” de Barbacoas, un municipio en Nariño, donde las mujeres de la comunidad lograron a través de su abstinencia sexual poner presión al gobierno regional para que se arregle la carretera (E4, 2012). Finalmente, las tasas de desempleo son muy altas, y hay pocos incentivos estatales para atraer a inversionistas. Sin duda, la industria petrolera es importante en zonas como Sucumbíos, pero pocos de los empleados son de la zona (E6, 2012). La presencia de AVNE complica el acceso de la población a estos puestos de trabajo, porque en zonas como el Bajo Putumayo los campesinos están tildados de saboteadores o colaboradores de la guerrilla, que ejerce atentados contra la infraestructura petrolera (E7, 2012).

La debilidad institucional también se muestra en la seguridad y la justicia. A pesar de la militarización, las comunidades carecen de la protección del Estado. En San Lorenzo no hay presencia efectiva de la policía. Aunque en el 2002 se crearon 18 modernas tropas policiales, en el 2008 se vieron obligados a dividirse en policía judicial, migratoria y urbana. Esto debilitó su accionar y presencia en la región. Como resultado de esta debilidad institucional para la seguridad ciudadana, “Los Hijos de San Lorenzo”, un grupo que se autoproclamaba de esta manera, ofrecía seguridad en la zona, financiándose con recursos de la extorsión (González 2008: 217). Actualmente, la policía cuenta con más recursos para su operación, pero según un oficial de la policía de San Lorenzo las deficiencias con respecto a recursos humanos y materiales continúan (E9, 2012). Otro de los mecanismos de autodefensa es la creación de comités de vigilancia y el armamento de la población, lo cual demuestra que la violencia parece ser la única respuesta viable a posibles agresiones. De hecho, la deficiencia en los sistemas judiciales ha generado crueles sistemas antidemocráticos de auto-ayuda. Debido a la insuficiencia de recursos humanos, infraestructura y protección de jueces, los dictámenes judiciales son escasos o inexistentes. Por esta razón, en las fronteras estos aspectos se manejan de otra forma: una mujer que ha sido engañada por su marido puede contratar a un sicario para tomar venganza de su esposo. Los precios de estos ‘encargos’ revelan la desesperación económica de las comunidades fronterizas: La vida de una persona puede costar entre 20 USD y 50 USD (González 2008: 221). Esto sirve para demostrar el abandono de esta región que se convirtió en una forma de violencia estructural y a su vez contribuye a la ‘naturalización’ de la violencia en la vida cotidiana de la población.

La segunda característica, el ambiente de bajo riesgo/alta oportunidad, facilita actividades transfronterizas ilegales como el contrabando de víveres y gasolina, pero, sobre todo en presencia de AVNE, puede incluir narcotráfico, entre otros. Mientras que la baja presencia de instituciones civiles es común en varias zonas de los países en desarrollo como Ecuador y Colombia, el ambiente de bajo riesgo/alta oportunidad es propio de las zonas fronterizas. Por un lado, ante la carencia de oportunidades de trabajo, este ambiente tiene ciertos beneficios: El comercio binacional a nivel local permite generar ingresos que en otras partes del país no se dan. Por otro lado, fomenta actividades ilícitas que, dado el abandono estatal, las comunidades fronterizas perciben como una legítima fuente de ingreso. Este es el caso a lo largo de los cerca de ochenta y siete cruces fronterizos no oficiales que conectan las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos con los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo (Fuerzas Armadas de Colombia 2012). En muchos casos las autoridades locales no toman medidas en contra de estas actividades porque saben que quitarían la base de subsistencia a pueblos enteros o se dejan sobornar para sacar provecho también. Adicionalmente al contrabando, la frontera se presta para el tráfico de municiones, armas y explosivos (Fuerzas

Armadas de Colombia 2012), por ejemplo a través de trueques de drogas por armas (E12, 2012). Este tráfico se mezcla fácilmente con las dinámicas comerciales legales en la frontera. En Chical, un pueblo en Carchi, para citar un ejemplo, el mercado que tiene lugar todos los viernes sirve para comprar lo necesario de la semana, y también como plataforma para negociar, vender y comprar sustancias estupefacientes, entre otros (E13, 2012). Según varios representantes de la sociedad civil (E14, 2012), algunos miembros de la comunidad indígena de la zona de Otavalo en Ecuador no sólo comercializan artesanía sino también se encargan del tráfico de armas. El tráfico de insumos para el procesamiento de la cocaína y el lavado de dinero son otros negocios en la frontera. En San Lorenzo la autora pudo observar edificios de lujo que no corresponden a los ingresos de la población. También, las casas de empeño en Esmeraldas y los cambistas en el puente internacional entre Tulcán en Ecuador e Ipiales en Colombia se usan para el lavado de activos (E15, 2012). Son fenómenos vinculados a la frontera porque ahí se genera 'dinero sucio' con actividades ilegales transfronterizas.

La tercera característica es la propensión a la impunidad. Trae consigo que las comunidades fronterizas son extremadamente vulnerables a la violación de sus derechos humanos y que la violencia contra la población está invisibilizada. Las zonas fronterizas facilitan la evasión de la ley porque constituyen espacios donde se enfrentan dos jurisdicciones, sistemas de seguridad y prácticas diplomáticas diferentes. En la frontera colombo-ecuatoriana estas circunstancias se han visto fortalecidas por las divergencias políticas e ideológicas entre el anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el presidente de Ecuador Rafael Correa (2006-presente). Muchos grupos de AVNE se benefician de estas condiciones pues cruzan la frontera de Colombia a Ecuador y operan en pueblos fronterizos ecuatorianos como Lago Agrio, Tulcán y San Lorenzo, lo que ha generado problemas para la población local (E16, E17, E18 y E19, 2011). Dado que el Estado ecuatoriano niega la presencia de guerrilleros colombianos en su territorio, las amenazas, homicidios selectivos y el reclutamiento forzado en terreno ecuatoriano frecuentemente se quedan sin respuesta de las autoridades. Al negar la presencia, también se niega la zozobra que ha generado la presencia de AVNE entre la población. En los últimos años los AVNE tienden a cruzar la frontera en vestidos de civil y sin armas, y en zonas como Carchi la violencia ha disminuido, sin embargo, el control social de los grupos continúa. Muchas personas no pueden expresar libremente su opinión sin temer alguna consecuencia (E20, E21, 2012). En muchos casos, los AVNE operan desde el lado colombiano, convocando reuniones en Colombia, en las cuales tienen que asistir comerciantes ecuatorianos y envían personas a cobrar la 'vacuna' (extorsión) en el lado ecuatoriano (E22, E23, 2012). Esta modalidad transfronteriza dificulta las investigaciones de las autoridades nacionales de tal manera que, frecuentemente, las comunidades se quedan a la merced de los AVNE. Los AVNE también se aprovechan de la poca cooperación en asuntos de seguridad cuando

su negocio ilegal está amenazado de estar detectado. Por ejemplo, después de que las fuerzas armadas colombianas habían aumentado los ataques militares contra los AVNE en la frontera sur del país, trasladaron los laboratorios e algunas plantaciones al lado ecuatoriano de la frontera para evitar las medidas de las autoridades colombianas (Tickner et al. 2011: 427). “Ciego, sordo, mudo” —esta actitud sirve en estos casos a la población para proteger su vida en vez de denunciar la presencia de laboratorios (E24, 2012). Lo mismo aplica si les quitan sus fincas o les obligan a cultivar coca en su terreno. Indudablemente, también hay casos en los cuales la gente está de acuerdo con los laboratorios o cultivos, porque saben que les permite obtener ‘plata fácil’.

De manera parecida, la porosidad de la frontera ayuda a camuflar las actividades ilícitas de los AVNE. Por ejemplo, beneficiándose de la relativamente bien desarrollada infraestructura vial en Ecuador, los AVNE parecen transportar las mercancías ilegales que producen en Putumayo hacia la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Las llevan en las carreteras pavimentadas a lo largo de la frontera a Esmeraldas donde cruzan la frontera por trochas informales otra vez para, navegando por el río, llegar hasta el puerto de Tumaco, el punto de partida de muchas rutas internacionales de tráfico. Esto tiene repercusiones en la vida cotidiana de las comunidades fronterizas. Como la autora experimentó, numerosos puestos de control del ejército, la policía y la Dirección Nacional Antinarcóticos forman parte de las rutas que llevan desde y hasta la frontera en las vías principales. Mientras que grandes cantidades de mercancía ilegal pasan debido a la corrupción de los funcionarios o porque no están llevadas por las vías principales, en estos puestos de control ocurren abusos, maltrato y falsas acusaciones contra personas que transitan por estas zonas (Federación de Mujeres de Sucumbíos 2012; E25, E26, 2012). En general, dado que la alta presencia de instituciones militares choca con la débil presencia de instituciones civiles del Estado, la militarización de la zona fronteriza para disminuir la presencia de los AVNE ha contribuido a la ‘securitización’ de la zona, más no a un nivel más alto de seguridad ciudadana de la población fronteriza.

La cercanía a la frontera internacional también permite ‘invisibilizar’ los crímenes violentos. Un ejemplo de esto ocurrió en 2007 cuando se encontraron los cuerpos de ocho ciudadanos ecuatorianos en Putumayo en una fosa común que parecía ser el resultado de operaciones paramilitares. En este caso el canciller ecuatoriano exigió que Ecuador forme parte de las investigaciones judiciales a fin de identificar los ecuatorianos supuestamente asesinados (El Universo 2007). Sin embargo, las huellas suelen desaparecer una vez cruzada la frontera, lo que dificulta establecer la identidad de los victimarios e incluso de las víctimas. El caso de la frontera marítima en el departamento colombiano de Nariño y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas es aún más complejo. Los actores armados aparentemente arrojan los restos de sus víctimas a los ríos que desembocan en el mar pacífico. Perdiéndose en el océano, estos cuerpos no se encuentran ni se identifican.

Consecuentemente, raras veces se hace justicia a los culpables y, agudizadas por la falta de denuncias, las tasas de homicidios oficiales no reflejan el número real de las personas que han sido asesinadas porque simplemente desaparecen.

La 'ciudadanía de sombra' en la frontera colombo-ecuatoriana

Como lo ha revelado el análisis de los tres factores propios de la frontera colombo-ecuatoriana, las comunidades viven realidades socio-políticas muy distintas a las del resto de sus países, sobre todo cuando hay presencia de AVNE. Se caracterizan por sistemas de (auto) gobernanza paralelos, una economía que se orienta a actividades transfronterizas, muchas veces ilegales, y una constante propensión a violaciones de derechos humanos. En estas realidades la forma de ciudadanía diverge del caso ideal basado en una relación Estado-sociedad que se fortalece mutuamente y en el cual la sociedad cumple con las reglas definidas entre el Estado y ella. La disfuncionalidad de la relación Estado-sociedad más bien lleva a que —de acuerdo con el concepto de la lógica de lo apropiado de March & Olsen (2008)— la población local se adapta a las circunstancias locales de los territorios fronterizos.

A veces la presencia de AVNE determina estas circunstancias. Cuando hay varios grupos, pueden estar en combate o tener acuerdos caracterizados por rupturas y cambios rápidos. Esta fragilidad produce una incertidumbre constante entre la población que impide establecer reglas de comportamiento adecuadas. Dado que los miembros de las redes de apoyo de los AVNE a veces cambian el grupo con el cual están asociados, ocurren homicidios selectivos contra posibles traidores. Las líneas poco claras entre testigos inocentes y miembros de AVNE resultan en la prevalencia de 'la ley del silencio' y la desconfianza que destruye el tejido social. De la misma forma, la incapacidad del Estado de romper el círculo de acuerdos tácitos, mina la relación Estado-sociedad. Las preguntas sobre quién es sujeto de ciudadanía y quién constituye una amenaza son ambiguas y no hay claridad sobre las 'reglas de juego' que le podría orientar a la población en su vida cotidiana.

En cambio, cuando un solo grupo tiene autoridad ilícita o varios grupos tienen acuerdos estables, esta influencia incide en las realidades socio-políticas: se crea una 'ciudadanía de sombra' (Idler 2012b). En estos casos la relación Estado-sociedad es sustituida por la relación entre los AVNE-sociedad. Esto ocurre cuando los AVNE ejercen las funciones del Estado. Una de estas funciones es la de crear un ambiente propicio para actividades económicas que permiten a la población mantener a sus familias. La infraestructura vial deficiente en Nariño y Putumayo por ejemplo impide tal ambiente. Por eso, en lugar de cultivar cacao o plátano, productos que requieren ser transportados a los mercados para su comercialización, muchos campesinos optan por cultivar coca. Realizan la primera fase de procesamiento para producir pasta de coca y la venden a

miembros de AVNE, quienes la recogen en las fincas (Defensoría del Pueblo 2007b: 5; E5, 2011). Con esto, de cierta manera, los AVNE ofrecen a la población opciones económicas más convenientes que el Estado. Igualmente, las comunidades transfronterizas aceptan fácilmente los incentivos económicos de los AVNE para trabajar como mensajeros, informantes, mulas de drogas o raspachines, por ejemplo. Según un académico ecuatoriano (E8, 2012), en 2009 un pescador de San Lorenzo ganaba 50 USD por semana. Si optaba por trabajar como raspachín en la colección de hoja de coca en el lado colombiano, ganaba entre 600 y 800 USD por semana.

Otra función estatal sustituida por los AVNE en el caso de ‘ciudadanía de sombra’ es mantener el orden a través de la generación de condiciones de seguridad y justicia. En comunidades del municipio de Tumaco, las Autodefensas Nueva Generación llevan a cabo acciones de ‘limpieza social’ en las que amenazan o asesinan a personas antisociales como delincuentes o drogadictos (Defensoría del Pueblo 2008b: 2). De esta forma imponen seguridad con sus propios medios. Es importante notar que estas dinámicas no se limitan al territorio colombiano, estas son de naturaleza transnacional. En San Lorenzo por ejemplo, los mecanismos de auto defensa han sido re-emplazados por AVNE, quienes distribuyen panfletos y se dedican a la “limpieza social” (E10, 2012). Lo mismo aplica para el pueblo fronterizo de General Farfán en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos (E11, 2012).

La ‘ciudadanía de sombra’ también implica ‘reglas de juego’ que reconocen los AVNE y la sociedad. Muchas veces hay ambivalencia en determinar si este reconocimiento surge del respeto de la sociedad hacia los AVNE o más bien del temor. Lo cierto es que, sobre todo en el caso de la guerrilla, existe un pequeño margen de maniobra para negociar estas reglas con las AVNE. Son reglas diversas, empezando por la manera de vestir o restricciones de empleo y acabando por la relación de los ciudadanos con el Estado. En algunas áreas las FARC han implementado el cobro de impuesto a comerciantes de bienes y servicios y así han obligado a campesinos a cultivar, cosechar y procesar coca y latex para la heroína. De igual forma, han determinado quién está a cargo de comprar y distribuir los insumos y derivados de la coca y el opio (Defensoría del Pueblo 2007a). En otras regiones los AVNE han ordenado a los campesinos no prestar sus animales de carga para ayudar a miembros de la fuerza pública. De igual manera se han presentado casos en los que las AVNE distribuyen panfletos con advertencias y amenazas en caso de que la población civil contacte a las fuerzas del Estado. Varios líderes comunitarios, profesores y médicos han sido asesinados por colaborar con el ejército colombiano. También obligan a las mujeres a darles agua, alimentación y servicios domésticos de lavandería, lo que resulta en la estigmatización por parte de las fuerzas militares hacia estas personas por colaborar con estos grupos (Defensoría del Pueblo 2009).

Otras reglas de comportamiento incluyen la restricción a la movilidad de la población, usando por ejemplo minas anti-personales como en los municipios fronterizos de Alto Mira, Barbacoas, Nulpes, Mayasquer, Miraflores, la Victoria y Jardines de Sucumbíos (todos en Nariño) (E34, 35, 2011).

Como estos ejemplos demuestran, las realidades socio-políticas de estas comunidades están fuertemente influidas por las reglas de los AVNE.

Territorios fronterizos como espacios invisibilizados

Los territorios fronterizos colombo-ecuatorianos en general, y sobre todo aquellos marcados por 'ciudadanía de sombra', constituyen espacios invisibilizados, es decir que las realidades socio-políticas que se vive en estos espacios no son muy bien conocidas y reconocibles desde 'afuera'.

Se destacan tres aspectos que contribuyen a la invisibilización: la falta de difusión de información, la normalización de la violencia y las interpretaciones inadecuadas que se tiene en los centros políticos de las fronteras. Primero, la invisibilización resulta de la falta de difusión de información sobre lo que está pasando. Los AVNE que tienen control sobre estos territorios restringen el acceso a instituciones externas. Ejemplos de ello son los barrios Viento Libre y Panamá en Tumaco donde los organismos internacionales y las instituciones estatales, incluyendo la policía, no pueden entrar. De igual forma, se han presentado casos en los que los AVNE ordenan a la comunidad permitir el acceso sólo a los actores externos que no mencionen asuntos de derechos humanos. Por no tener acceso, la comunidad internacional ignora la situación crítica de las comunidades y muchos crímenes quedan en la impunidad. En lugar de ser reconocidas como víctimas de la violencia y de la dominación de los AVNE, las comunidades son señaladas de colaborar con los AVNE. En 2007 en Ipiales, encuestadores gubernamentales sobre seguridad ciudadana sólo encuestaron al 50 por ciento de los habitantes, porque no querían comprometer su propia seguridad (Defensoría del Pueblo 2007b). Esto produce una imagen distorsionada de la situación, lo que incide de manera negativa en el diseño de políticas públicas. Además, en zonas de 'ciudadanía de sombra' los AVNE generalmente definen sobre qué temas y a qué personas hablar. En muchas zonas, las guerrillas organizan reuniones a las que toda la comunidad debe asistir:

Pasaron estos señores, comenzaron a hacer reuniones, comenzaron, bueno, a poner un poco de leyes aquí, los elenos, entonces [...] comenzaban a decirnos algunas cosas [...], nos reunimos el pueblo, hicimos sesión [...] y vimos que esto no iba a llegar a un feliz termino. Entonces dijimos que 'no pues, que esto no estaba bien', pero bueno, seguimos la gestión [...] (E30, 2011).

Los AVNE advierten a la población de no mencionar el tema de derechos humanos cuando haya presencia de organismos internacionales, de lo contrario la castigan. "En boca

cerrada no entran moscas” (E36, 2012). De acuerdo con este lema, la misma comunidad prefiere no quejarse, ni denunciar y quedarse callada, porque teme represalias; impera la ley del silencio. En comunidades transfronterizas la invisibilización parece ser mayor que en otras zonas. Por ejemplo, en el caso de reuniones de la guerrilla en el lado colombiano con campesinos ecuatorianos de Carchi o Sucumbíos, ni el gobierno de Colombia ni de Ecuador se da cuenta o toma medidas, ya que cualquier investigación que se desarrolle en la zona termina en la frontera nacional (E31, E32, E33, 2012). Como consecuencia de esto, las autoridades locales, regionales y municipales no están en capacidad de responder a estos problemas o de realizar acciones concretas al respecto (Defensoría del Pueblo 2007b).

Segundo, por la normalización de la violencia hay muchas comunidades sumisas que no conocen otra realidad que vivir bajo una autoridad ilícita y desconocen que las reglas impuestas por los AVNE representan una limitación a sus derechos humanos. Es la realidad de un Estado apartado personificado por los políticos del gobierno central que ven en la televisión y que prácticamente nunca llega hasta donde viven. La carencia de servicios básicos ha llevado a la gente a acudir a la autoridad ilícita más que al Estado en caso de problemas y la ausencia de oportunidades legales de trabajo. Esto ha hecho que la gente considere ‘normal’ basar su existencia en el contrabando y los cultivos ilícitos, por eso no demanda alternativas al Estado. Esta normalización de la violencia y la legitimación de las actividades ilegales es un fenómeno muy propio de zonas fronterizas porque el ambiente de bajo riesgo/alta oportunidad que se presta para esto invisibiliza las realidades fronterizas ante el Estado.

Tercero, en los centros políticos de Colombia y Ecuador predominan interpretaciones inadecuadas sobre las comunidades fronterizas por lo cual las necesidades básicas insatisfechas y las circunstancias violentas que resultan de la presencia de AVNE están invisibilizadas. Desde la perspectiva de Ecuador, un estado sin conflicto armado, la frontera norte es vista generalmente ante la regionalización del conflicto colombiano hacia sus vecinos (Poe & Isacson 2009). El miedo de que la violencia se difunda hacia el resto del país se refleja en los estereotipos que reciben los colombianos: que los refugiados colombianos que entran a Ecuador a través de la frontera norte son miembros de AVNE, que los hombres son sicarios o narco-traficantes y las mujeres prostitutas (OIPAZ 2004). Cuando se reportan crímenes en los medios de comunicación y entre sus autores son colombianos su nacionalidad tiende a ser resaltada y, de acuerdo con una encuesta de FLACSO Ecuador en 2010, el 86.9 por ciento de las personas entrevistadas en Quito creen que la presencia de inmigrantes en el país (la mayoría siendo colombianos) produce inseguridad (Zepeda & Verdesoto 2010). Esta percepción no coincide con los hechos: Entre 2006 y 2011, la inmigración a Ecuador ha aumentado, pero el número de extranjeros arrestados por crímenes en Ecuador ha disminuido de 1.100 personas en 2006 a 744 en

2011 (E28, 2012). Parece que las percepciones desde el centro surgen de una mezcla de generalizaciones de las dinámicas de seguridad en el territorio fronterizo que no refleja lo diverso y complejo que es la realidad en este territorio. Toda la población transfronteriza es vista como criminal y, por eso, toda la zona fronteriza de Ecuador es considerada un área 'no-go', en vez de reconocer las realidades complejas que se vive allá (E29, 2012). Las percepciones en el centro político de Colombia son diferentes. Dado que el conflicto colombiano no se limita a la frontera, son muy pocos los temores por expansión del conflicto desde allá y las percepciones de las fronteras parecen a las de otras zonas con conflicto. Sin embargo, esto impide reconocer que —por las características propias de los territorios fronterizos— las repercusiones de la presencia de los AVNE en las comunidades fronterizas suelen divergir de las repercusiones en otras regiones, contribuyendo a la invisibilización de la situación socio-política.

Conclusión

El análisis de las realidades socio-políticas de los territorios fronterizos colombo-ecuatorianos desde una perspectiva de ciudadanía ha sido fructífero en varios aspectos. A partir de las tres características de las zonas fronterizas andinas —la inclinación hacia sistemas débiles de gobernanza estatal, un ambiente de 'bajo riesgo/alta oportunidad' y una propensión a la impunidad— ha ayudado a obtener una imagen diferenciada de las realidades socio-políticas en los territorios fronterizos que, en gran parte, están caracterizados por la misma cercanía a una frontera internacional. En este sentido, ha contribuido a profundizar nuestra comprensión de territorios de frontera como espacios que requieren de un enfoque transnacional para visibilizar las realidades que se viven en estas zonas, particularmente en aquellas en las cuales hay presencia de AVNE.

Por lo general, los medios de comunicación y el discurso público de los gobiernos centran la atención en los incidentes violentos y sensacionalistas de las zonas de frontera, particularmente, en combates, masacres o desplazamientos masivos. La situación que desde los centros de los Estados parece ser 'tranquila' es ignorada. Sin embargo, son precisamente estas situaciones de 'ciudadanía de sombra', donde la vida cotidiana de la comunidad transfronteriza es fuertemente influida por las reglas de juego de AVNE y donde, por ende, el Estado ha perdido cualquier influencia. La invisibilización de estas situaciones con 'ciudadanía de sombra' puede tener impactos significativos para los Estados a nivel estructural: Lentamente, llevan a un *status quo* en el cual ni los ciudadanos confían en los agentes estatales ni los agentes estatales reconocen las necesidades y derechos de los ciudadanos y tampoco se ponen a servicio de la sociedad. Por eso, el Estado debe tener un interés en recuperar la confianza y con esto la lealtad de esta parte de su ciudadanía, las comunidades fronterizas. Una mayor presencia de instituciones civiles —no sólo militares—, incentivos económicos para dedicarse a actividades legales

e inversión en la infraestructura vial y de comunicación podrían contribuir a esto y contrarrestarían las oportunidades ilegales ofrecidas por AVNE, minimizando su margen de operación. Al mismo tiempo, los dos Estados que comparten la frontera deberían asumir una perspectiva transnacional basada en la cooperación bilateral y en esfuerzos para mejorar el entendimiento mutuo. A largo plazo, esto no sólo sería para el beneficio de comunidades en territorios fronterizos, sino también ayudaría a consolidar sociedades solidarias.

Referencias bibliográficas

Andreas, Peter

- 2003 Redrawing the line: Borders and security in the twenty-first Century. *International Security* 28(2): 78-111.

Atzili, Boaz

- 2007 When good fences make bad neighbors: Fixed borders, state weakness, and international conflict. *International Security* 31(3): 139-173.

Baud, Michiel & Willem van Schendel

- 1997 Toward a comparative history of borderlands. *Journal of World History* 8(2): 211-242.

Berger-Schmitt, Regina

- 2000 *Social cohesion as an aspect of the qualities of societies*. EU Reporting Working Paper, 14. Mannheim: Centre for Survey Research and Methodology.

Bustamante, Ana Marleny

- 2011 La frontera colombo-venezolana: de la conflictividad limítrofe a la global. En: Carrión, Fernando & Johanna Espín (eds.): *Relaciones fronterizas: Encuentros y conflictos*. Quito: Crearimagen, 203-222.

Celi, Carla, Camilo Molina & Gabriela Weber

- 2009 *Cooperación al desarrollo en la frontera norte: Una mirada desde Sucumbíos 2000-2007*. Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD.

Defensoría del Pueblo

- 2007a *Documento interno*.
 2007b *Informe de riesgo* No. 017-07 A. I. Bogotá: Sistema de Alertas Tempranas.
 2008a *Nota de seguimiento* No. 017-11, Tercera nota al Informe de riesgo No 024-08 A.I. Bogotá: Sistema de Alertas Tempranas.
 2008b *Informe de riesgo* No. 029-08 A.I. Bogotá: Sistema de Alertas Tempranas.
 2009 *Documento interno*.
 2010 *Documento interno*.

Dumas, Juan & Volker Frank

- 2009 *Análisis de paz, conflictividad y desarrollo (APCD): Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, y Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos*. Quito: Fundación Futuro Latinoamericano, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y Centro Carter.
- 2007 *Cancilleres buscarán mejorar relaciones Ecuador-Colombia*, 26.02.2007. <<http://www.eluniverso.com/2007/05/26/0001/8/0C4EDB477CB249D084AB8D4EFB9619A2.html>> (13.10.2014).

Federación de Mujeres de Sucumbíos

- 2012 *Denuncia Pública Urgente*, 26 de Octubre 2012. Lago Agrio: Oficina de Derechos Humanos. <<http://lafede.org/images/stories/documentos/denuncia%20publica%20sucumbios.pdf>> (22.04.2015).

Fuerzas Armadas de Colombia

- 2012 *Documento interno*.

González Carranza, Laura

- 2008 *Fronteras en el limbo: El Plan Ecuador en el Ecuador*. Serie Investigación 13, Quito: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

Goodhand, Jonathan

- 2008 War, peace and the places in between: Why borderlands are central. En: Pugh Michael, Neil Cooper & Mandy Turner (eds): *Whose peace? Critical perspectives on the political economy of peacebuilding*, New Security Challenges Series. Londres: Palgrave Macmillan, 225-244.

Hirschman, Albert O.

- 1970 *Exit, voice and loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states*. Cambridge: Harvard University Press.

Human Rights Watch

- 2010 *Paramilitaries' heirs. The new face of violence in Colombia*. New York: Human Rights Watch.

Idler, Annette

- 2012a Arrangements of convenience in Colombia's borderlands: An invisible threat to citizen security? *St Antony's International Review* 7(2): 93-119.
- 2012b Exploring arrangements of convenience among violent non-state actors? *Perspectives on terrorism* 6(4-5): 63-84.

International Crisis Group (ICG)

- 2010 *Improving security policy in Colombia*. Latin America Briefing, 23. Bogotá/Bruselas: International Crisis Group.
- 2012 *Dismantling Colombia's new illegal armed groups: Lessons from a surrender*. Latin America Report, 41. Bogotá/Bruxelles: International Crisis Group.

Leal Buitrago, Francisco

- 2004 Armed actors in the Colombian conflict. En: Koonings, Kees & Dirk Kruijt (eds.): *Armed actors: Organized violence and state failure in Latin America*. London: Zed Books.

- March, James & Johan Olsen
2008 Elaborating the “New Institutionalism”. En: Rockman, Bert, Sarah Binder & Roderick Arthur William ‘R.A.W.’ Rhodes (eds.): *The Oxford handbook of political institutions*. Oxford: Oxford University Press.
- Mason, Ana & Arlene Tickner
2006 A transregional security Cartography of the Andes. En: Drake, Paul & Eric Hershberg (eds.): *State and society in conflict: Comparative perspectives on Andean crises*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Millett, Richard
2002 *Colombia’s conflicts: The spillover effects of a wider war*. Carlisle: Strategic Studies Institute.
- Observatorio Internacional por la Paz (OIPAZ)
2004 *Testimonios de Frontera: Segundo Informe*. Quito: Observatorio Internacional por la Paz.
- Ohmae, Kenichi
1990 *The borderless world: Power and strategy in the interlinked economy*. New York: Harper.
- Picciotto, Robert, Funmi Olonisakin & Clarke, Michael
2007 *Global development and human security*. New Brunswick: Transaction.
- Poe, Abigail & Adam Isacson
2009 *After Plan Colombia: Evaluating “Integrated Action”, the next phase of U.S. assistance*. International Policy Report. Washington, D.C.: Center for International Policy.
- Rabasa, Angel & Peter Chalk
2001 *Colombian labyrinth. The synergy of drugs and insurgency and its implications for regional stability*. Santa Monica: Research and Development Cooperation (RAND).
- Ramirez, Socorro
2011 Civil society peacebuilding on Colombia’s borders. En: Zartman, William & Alexander Ramsbotham (eds.): *Accord: An international review of peace initiatives, building peace across borders*. Londres: Conciliation Resources.
- Schendel, Willem van & Itty Abraham
2005 Introduction: The making of illicitness. En: Schendel, Willem van & Itty Abraham (eds.): *Illicit flows and criminal things: States, borders, and the other side of globalization*. Bloomington: Indiana University Press, 1-37.
- Steinitz, Mark
2002 *The terrorism and drug connection in Latin America’s Andean region*. Policy papers on the Americas, 8(5). Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.
- Tickner, Arlene, Diego García & Catalina Arreaza
2011 Actores violentos no estatales y narcotráfico en Colombia. En: Gaviria, Alejandro & Daniel Mejía (eds.): *Política antidrogas en Colombia*. Bogotá: Ediciones Uniandes, 413-445.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
2010 *Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo de Colombia*. HCR/EG/COL/10/2. Washington D.C.: United Nations High Commissioner for Refugees.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

- 2010 *The globalization of crime. A transnational organized crime threat assessment*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- 2011 *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2010*. Bogotá: United Nations Office on Drugs and Crime.

Zepeda, Beatriz & Luis Verdesoto

- 2010 *Ecuador, las Américas y el mundo 2010. Opinión pública y política exterior*. Quito: FLACSO.

Entrevistas

- E1 2011 Entrevista con agencia internacional, Pasto, Colombia, 10/2011.
- E2 2012 Entrevista con militar ecuatoriano, Palma Real, Esmeraldas, Ecuador, 02/2012.
- E3 2011 Entrevista con campesina de Barbacoas, Pasto, Colombia, 10/2011.
- E4 2012 Entrevista con lideresa comunitaria de Barbacoas, Pasto, Colombia, 02/2012.
- E5 2011 Entrevista con campesinos desplazados colombianos, Pasto, Colombia, 10/2011.
- E6 2012 Entrevista con organización no-gubernamental, Quito, Ecuador, 01/2012.
- E7 2012 Entrevista con campesino, Putumayo, Colombia, 03/2012.
- E8 2012 Entrevista con académico ecuatoriano, Quito, Ecuador, 01/2012.
- E9 2012 Entrevista con un oficial de policía, San Lorenzo, Ecuador, 02/2012.
- E10 2012 Entrevista con organización no-gubernamental, Esmeraldas, Ecuador, 02/2012.
- E11 2012 Entrevista con organización no-gubernamental, Sucumbíos, Ecuador, 02/2012.
- E12 2012 Entrevista con experto de inteligencia militar, Quito, Ecuador, 03/2012.
- E13 2012 Entrevista con representante de la sociedad civil, Carchi, Ecuador, 02/2012.
- E14 2012 Entrevista con representantes de la sociedad civil, Carchi, Ecuador, 02/2012.
- E15 2012 Entrevistas con organizaciones no-gubernamentales, Esmeraldas y Carchi, Ecuador, 02-03/2012.
- E16 2011 Entrevistas con organizaciones no-gubernamentales, Pasto, Ipiales, Tumaco, Colombia; Tulcán, Ecuador y Mocoa, Colombia, 10-11/2011.
- E17 2011 Entrevistas con agencias internacionales en Pasto y Mocoa, Colombia, 10-11/2011.
- E18 2011 Entrevistas con religiosos en Pasto, Tumaco, Colombia; Tulcán, Ecuador y Mocoa, Colombia, 10-11/2011.
- E19 2011 Entrevistas con personas desplazadas en Pasto y Mocoa, Colombia, 10-11/2011.
- E20 2012 Entrevistas con organizaciones no-gubernamentales, Carchi, Ecuador, 03/2012.
- E21 2012 Entrevista con un sacerdote, Carchi, Ecuador, 03/2012.
- E22 2012 Entrevistas con campesinos, Sucumbíos, Ecuador, 01/2012.
- E23 2012 Entrevistas con comerciantes, Sucumbíos, Ecuador, 01/2012.
- E24 2012 Entrevista con organización no-gubernamental, Sucumbíos, 01/2012.
- E25 2012 Entrevistas con organizaciones no-gubernamentales, Quito, Ecuador, 01-03/2012.

- E26 2012 Entrevistas con agencias internacionales, Sucumbíos y Quito, Ecuador, 01-03/2012.
- E27 2011 Entrevistas con personas desplazadas, Nariño, Colombia, 10-11/2011.
- E28 2012 Entrevista con experto en migraciones, Quito, Ecuador, 03/2012.
- E29 2012 Entrevista con experto en migraciones, Quito, Ecuador, 03/2012.
- E30 2011 Entrevista con una persona desplazada, Nariño, Colombia, 10/2011.
- E31 2012 Entrevista con organización no-gubernamental, San Lorenzo, Esmeraldas, Ecuador, 02/2012.
- E32 2012 Entrevista con un sacerdote, Carchi, Ecuador, 02/2012.
- E33 2012 Entrevistas con líderes comunitarios, Esmeraldas, Ecuador, 01-02/2012.
- E34 2011 Entrevistas con agencias internacionales, Pasto, Colombia, 10/2011.
- E35 2011 Entrevistas con agencias nacionales, Tumaco, Colombia, 10/2011.
- E36 2012 Entrevista con campesina, Sucumbíos, Ecuador, 01/2012.
- E37 2012 Entrevista con político local, Carchi, Ecuador, 02/2012.